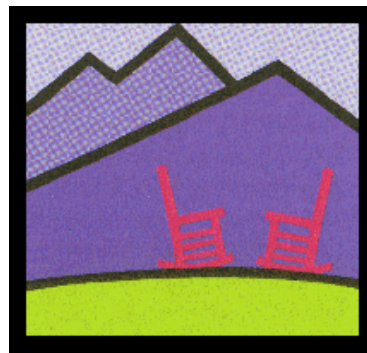


**A través de Razas y Naciones:
Construyendo Nuevas Comunidades en el Sur**

**DERECHOS CIVILES, INMIGRACION Y PERSPECTIVAS DE
COLABORACIÓN PARA LOGRAR JUSTICIA SOCIAL EN GEORGIA**

Por Ellen Spears



DERECHOS CIVILES, INMIGRACION Y PERSPECTIVAS DE COLABORACIÓN PARA LOGRAR JUSTICIA SOCIAL EN GEORGIA

Por Ellen Spears

El crecimiento sin precedentes de la población latina de Georgia desde el año 1990 hasta el 2000 y el aumento de 700 inmigrantes por día, han dado como resultado una población combinada de afroamericanos, latinos, asiático-americanos, americanos nativos (indígenas) y habitantes de las islas del Pacífico que excede actualmente un tercio de la población total del estado¹. Es posible que las alianzas entre estos grupos y blancos progresistas ejerzan una poderosa influencia política para responder a preocupaciones en materia de justicia social y tratar el tema inconcluso de los derechos civiles. Sin embargo, tal diversificación está ocurriendo simultáneamente con ataques intencionales tanto a los beneficios obtenidos por el movimiento por los derechos civiles como a los derechos de los inmigrantes, son tendencias interrelacionadas que aumentan potencialmente las cuestiones divisivas y plantean desafíos para las coaliciones multi-raciales y multi-étnicas. ¿Quién debería beneficiarse de los “remedios” específicos para cada grupo “racial”, tales como la acción afirmativa? ¿Sobre qué bases y en torno a qué temas podrían unirse los defensores de los derechos civiles de Georgia con la gente de color llegada más recientemente? Este capítulo comienza con una breve reseña de los importantes cambios demográficos producidos en Georgia y continúa con una reflexión sobre ciertos desafíos y oportunidades que deben enfrentar los defensores de los derechos civiles y de los derechos de los inmigrantes. Las secciones subsiguientes examinan con cierto detalle un reciente debate en la legislatura de Georgia sobre la definición de “minoría”, e identifican lecciones aprendidas a partir de ese episodio sobre las perspectivas de colaboración para lograr justicia social.

Actualmente, Georgia tiene más residentes latinos (según los cálculos del año 2002, 516.530) que cualquier otro estado del sur históricamente considerado no latino. El censo del año 2000 mostró un aumento del 300 por ciento en la población latina de Georgia durante la década anterior, el tercer crecimiento mayor relativo de la región (luego de Carolina del Norte con un aumento del 394 por ciento y Arkansas, con un aumento del 337 por ciento). Los principales condados que circundan Atlanta (Gwinnett, Forsyth, Cherokee y Rockdale) mostraron tasas de crecimiento aún mayores, alcanzando un 600 por ciento². Si bien el área metropolitana de Atlanta constituye el hogar de más del 60 por ciento de la población latina de Georgia, tal concentración no es la única del estado. La industria de alfombras de Dalton, ubicada en el Condado de Whitfield en la sección noroeste de Georgia, depende de los inmigrantes mejicanos debido a que los empleos que ofrece pagan salarios bajos. La industria frigorífica de aves de Gainesville cuenta con personal latino, así como también la producción agropecuaria de Vidalia y Valdosta, yendo hacia el sur del estado.

¹ Oficina de Censos de los Estados Unidos. Censo de Población, 2000. “La Oficina del Censo revela nuevos estudios estadísticos”. *Mundo Hispánico*, 22 de mayo de 2003, pág. 6.

² Oficina de Censos de los Estados Unidos, *Censo de población*, 2000. “El Estado está aprendiendo a integrar a los hispanos” [State learning to embrace Hispanics]. *Atlanta Journal-Constitution*, 3 de abril de 2001, pág. A8.

La conjunción entre las preocupaciones acerca de los derechos civiles y los problemas de inmigración se hace visible en cada una de estas comunidades. En Dalton, por ejemplo, los líderes civiles y empresariales promovieron intercambios con Méjico que fueron muy bien recibidos y sirvieron para construir relaciones intergrupales más estrechas en el contexto de la educación pública; sin embargo la población blanca salió de las escuelas públicas, dónde hoy la mayoría de los estudiantes son latinos. Los trabajadores agrícolas latinos del sur de Georgia han sido acosados por los encargados de hacer cumplir la ley en el nivel local. Estos y otros casos de éxodo de la población blanca y categorización racial (“*racial profiling*”) sirven para racializar a los nuevos inmigrantes, lo cual evoca experiencias paralelas de los afroamericanos. En respuesta, los inmigrantes han acudido a recursos jurídicos e institucionales que se crearon para brindar respuestas al movimiento de derechos civiles, tales como el Programa de Servicios Jurídicos de Georgia, para defenderse del acoso de sus empleadores y de los encargados de hacer cumplir la ley. En Gainesville, las organizaciones de derechos civiles se unieron con la Comisión de hispanos del noreste de Georgia para oponerse a los carteles contra los inmigrantes, en los cuales se leía “¡La amnistía para los invasores es traición! (Detengan la invasión de inmigrantes ilegales)” e indicaban a la gente que visitaran el sitio Web www.noamnestycampaign.com. Esta alianza organizada localmente estableció una conexión entre el apoyo a los nuevos residentes latinos y la preocupación por la justicia racial y las expresiones hostiles de sentimientos en contra de los inmigrantes.

Sin embargo, a veces el pedido de respeto de los derechos de los inmigrantes se enfrenta a una lucha difícil a favor de la justicia racial, no solamente porque los grupos de color locales pueden cuestionar los reclamos de los inmigrantes en cuanto a protecciones y vías de acción legal específicas para su raza, sino también debido a que los inmigrantes no se definen necesariamente en términos raciales. Los inmigrantes de América Latina ingresan a la sociedad estadounidense, que es muy consciente del “color” de las personas, auto-identificándose de acuerdo con su país de origen, o sea, como colombianos, bolivianos, mejicanos, venezolanos, etc., e identificándose según su extracción socioeconómica. En su país de origen, se ha hecho menos hincapié en la “raza” que en la identificación con un grupo étnico³. Además, los inmigrantes de primera generación tienden a concentrarse en las políticas de los Estados Unidos en relación con sus países de origen y también en los problemas de sus propios países, en lugar de poner su atención en las cuestiones políticas locales de su nueva tierra.⁴

Sin embargo, una vez que están en los Estados Unidos, la identidad étnica de los inmigrantes se redefine, convirtiéndose en “racializada” mediante esquemas de clasificación basados en una diferenciación conciente del “color” de las personas, a través de reacciones racistas de los blancos dominantes. Los latinos que viven en Georgia y otros lugares experimentan problemas que en los Estados Unidos son comúnmente entendidos como discriminación racial, tales como categorización racial y barreras para acceder plenamente a la educación, los servicios de salud, la participación política y el empleo. Esta discriminación está ligada al nivel socioeconómico y con frecuencia es la

³ También se cuestiona la invisibilidad de la raza en las culturas latinoamericanas y la distinción entre la discriminación racial y étnica.

⁴ Portes, Alejandro y Rubén G. Rumbaut, *Immigrant America: A Portrait* (Berkeley: Universidad de California Press, 1996), pág. 354-378.

clase trabajadora y son los inmigrantes de bajos ingresos quienes la sufren con mayor dureza.⁵

Los hechos históricos señalan otras interacciones entre la justicia racial y los derechos de los inmigrantes. El sentimiento contra los inmigrantes de los siglos XIX y comienzos del XX tenía sus raíces en las mismas teorías raciales que apoyaron la segregación. De esta manera, la eliminación de algunas restricciones inmigratorias se produjo en forma paralela al progreso del movimiento por los derechos civiles. El anti-nazismo que surgió luego de la segunda Guerra Mundial, un énfasis creciente en los derechos humanos y la emergente oposición a la segregación al estilo “*Jim Crow*” hicieron menos aceptables las justificaciones raciales para limitar la inmigración. El movimiento por los derechos civiles contribuyó enérgicamente a cambiar las políticas inmigratorias y apoyó los esfuerzos para eliminar el sistema racialmente discriminatorio de cupos por país de origen para inmigrantes y refugiados⁶.

A pesar de la entrelazada historia, los intereses comunes entre los afroamericanos del sur y los nuevos inmigrantes no se perciben claramente. La competencia entre ambos se hace evidente en el contexto de una economía volátil y el desplazamiento laboral percibido o real de los trabajadores afroamericanos por parte de los inmigrantes latinos. Los empleadores generalmente rotulan a los latinos (en especial en industrias como la de la construcción, la hotelera y gastronómica) como “muy trabajadores” los enfrentan a los afroamericanos, a quienes rotulan de “holgazanes” o que “no cooperan”. A menudo este proceso les permite a los empleadores tomar ventaja de la buena predisposición para trabajar de los latinos recién llegados que trabajan en circunstancias difíciles y aceptan salarios bajos en vez de permanecer desempleados. Las tensiones se extienden más allá del lugar de trabajo y de las interacciones entre afroamericanos y latinos. Estas tensiones en la comunidad pueden surgir en vecindarios de bajos ingresos, dónde a veces, pero no siempre, predominan los residentes afroamericanos, vecindarios a los cuales son atraídos los distintos grupos de inmigrantes y refugiados debido al bajo costo relativo de las viviendas. Las disputas pueden producirse debido a la asignación de recursos públicos, por ejemplo, la educación bilingüe y sobre la percepción de que los administradores de las escuelas y los maestros favorecen a determinados grupos de estudiantes racialmente definidos—lo que a veces incluye a los asiáticos y también a los blancos.

El hecho aparente de que los miembros de grupos de inmigrantes progresan fácilmente convirtiéndose en dueños de empresas es otra fuente de conflicto. El corredor de la Ruta Buford, ubicado al noreste de Atlanta, ofrece un ejemplo del crecimiento de

⁵ El nivel de la clase en el país de origen, combinado con la condición de inmigrante en los Estados Unidos, con frecuencia limita las oportunidades de los inmigrantes. Las ferias de empleo organizadas por los empleadores pueden reforzar estas distinciones, asociando el impacto de desventaja económica, la situación legal del inmigrante y la discriminación racial. “La Asociación Latinoamericana que funciona en Atlanta realiza dos ferias de empleo por año, una dirigida a empleos para niveles iniciales en el sector de servicios, tales como construcción, paisajismo, hoteles y restaurantes (dónde se requiere poco conocimiento de inglés) y otra dirigida a personal bilingüe de nivel medio y profesionales”, comenta Luz Borrero del Consejo Regional del Sur.

⁶ DeLaet, Debra L. “Del Nativismo a la No-discriminación”[From Nativism To Nondiscrimination: U.S. Immigration Policy in Historical Perspective]. En *U.S. Immigration Policy in an Age of Rights* (Westport, Connecticut: Praeger, 2000), pág. 23-48.

los pequeños negocios cuyos dueños son mejicanos, coreanos e inmigrantes de otros países. Estos locales y almacenes atienden a los vecindarios de inmigrantes que se están desarrollando en las cercanías. En otras partes de la ciudad, las experiencias con las prácticas de empleo, las políticas para la fijación de precios y las relaciones con el cliente de los dueños de negocios que no son blancos sino generalmente asiáticos inmigrantes establecidos en comunidades afroamericanas, se han convertido en una fuente de división racial o étnica. El sociólogo Alejandro Portes destaca no solamente «la oposición de los blancos nativos hacia la “apropiación” por parte de los inmigrantes de determinadas zonas urbanas sino la “hostilidad de los negros locales y otras minorías locales contra el comportamiento ‘explotador’ de los extranjeros”⁷. Los afroamericanos han sido testigos de la llegada de un grupo étnico tras otro, los cuales recibieron por parte de los blancos al menos la aceptación parcial y oportunidades que a ellos se les siguen negando. La percepción de que los inmigrantes latinos pueden elegir entre identificarse racialmente como “negros” para tener acceso a programas de “remedio” que promueven la equidad o la identificarse como “blancos” para favorecer su acceso a la sociedad dominante, en especial en la segunda generación, puede agravar el sentimiento de los afroamericanos de ser víctimas de injusticia.

Todas esas tensiones reales, las cuales han aflorado en distintos grados en diferentes localidades de Georgia, restan energía y convalidación desde un contexto nacional más amplio a las afrontas contra las libertades civiles de los inmigrantes y las reducciones sistemáticas de las políticas destinadas a lograr “remedios” para la situación específica de individuos identificados racialmente. El crecimiento contundente de la inmigración en el sur de los Estados Unidos durante la década del noventa estuvo acompañado por un aumento de las actividades nativistas, con organizaciones tales como *U.S. English* que se oponen a la educación bilingüe y al uso del idioma español. Desde el 11 de septiembre de 2001, esa insistencia agresiva en la asimilación ha dado lugar a un repudio temeroso de la libertad que tienen muchos extranjeros para ingresar o permanecer en los Estados Unidos. El surgimiento de actividades contra los inmigrantes apareció luego de las campañas nacionales para socavar los logros en materia de derechos civiles, como las iniciativas contra la acción afirmativa, las medidas jurídicas para eliminar la supervisión de los tribunales sobre distritos escolares profundamente segregados y un patrón de actuaciones de la justicia penal que parecen motivadas racialmente. Además, el empeoramiento de la situación económica pone una mayor exigencia en la gente trabajadora (incluyendo los blancos) en todos los aspectos de la vida, en especial a aquellos que no pueden acceder a empleos más redituables en la “Nueva Economía” y esto resulta en una inseguridad cada vez mayor y en la percepción de que aquellos grupos definidos como “Otros” son amenazas económicas.

Esta situación, a la vez promisoría y desalentadora, merece una aclaración de los objetivos de los derechos civiles y del significado de la justicia racial. El tratamiento dispar y la animosidad basada en diferencias raciales a las cuales se enfrentan tanto las nuevas poblaciones como las viejas, plantean interrogantes clave y estratégicos. ¿Es posible que las enseñanzas obtenidas de examinar los derechos de los inmigrantes y las necesidades de las distintas personas de color puedan servir para ampliar, actualizar y

⁷ Portes y Rumbaut, *Immigrant America*, pág. 133.

revigorizar nuestro entendimiento de los derechos civiles? Aún más, ¿es posible que éstas enseñanzas les den energía a los intentos que se están haciendo para implementar “remedios” que resulten en justicia e igualdad completas?

A qué llamamos minoría?

Las políticas raciales específicas que surgieron del movimiento por los derechos civiles están generalmente enfocadas hacia miembros individuales de determinados grupos “minoritarios” que han sido históricamente excluidos del acceso a los recursos clave, para implementar acciones reparadoras⁸. En esos contextos, la definición jurídica de minoría funciona como una puerta que admite a unos grupos y excluye a otros. Las acciones de los poderes legislativo y ejecutivo para establecer o cambiar los parámetros de las “minorías” puede convertirse en un punto álgido de conflictos intensos por cuestiones de raza, identidad étnica, desventaja histórica y la función apropiada del gobierno. Dado que muchas de las nuevas poblaciones de color del sur de los Estados Unidos son inmigrantes—sobre todo latinos—el asunto de los derechos inmigratorios y de las relaciones entre raza e identidad étnica y la condición de inmigración complican esos debates aún más en estados como Georgia.

Una iniciativa estatal que surgió del poder legislativo en el año 2001 ilustra el potencial de ese conflicto en todo el complejo triángulo que abarca a los afroamericanos, los latinos y los blancos. En el contexto de una medida para reformar una disposición que otorga una pequeña exención impositiva a las empresas que reciben contratos del estado que a su vez subcontratan con firmas minoritarias, a la legislatura de Georgia se le solicitó que especificara que “miembro de una minoría” incluye a gente que es negra, hispana, de origen asiáticos o de las islas del Pacífico, indígenas americanos o asiáticos de la India. En ese momento la ley del estado definía el término “minoría” como “un miembro de una raza que incluye menos del 50 por ciento del total de la población del estado”⁹. El problemático término “raza” no se define en la ley existente, ni se reconoce que la gente de color representa la mayoría numérica en algunas jurisdicciones. El proyecto de ley del año 2001 proponía otorgarles a las empresas que recibían un contrato con el estado, una exención en los impuestos de hasta \$6.000 dólares por año si contrataban subcontratistas pertenecientes a minorías para los servicios de construcción, equipos y bienes.

La diputada Stephanie Stuckey Benefield, una legisladora blanca que representa a los vecindarios progresistas del centro de la ciudad de Atlanta, introdujo la medida con la ayuda de la oficina del gobernador Roy Barnes, copatrocinada por el diputado Roger Byrd (Demócrata-Hazelhurst), de una zona más conservadora del sur de Georgia. Dado que la propuesta estaba diseñada para agregar empresas hispanas a la lista de aquellas que

⁸ Aquí debemos reconocer la inadecuación del término “minoría”, un término que algunos evitan utilizar por completo. Además de la connotación de “menos que”, la cual podría ofender, el término se utiliza a veces para denotar “números relativos” y otras veces para significar “poder relativo”. En muchas ciudades y en algunas zonas rurales, los afro americanos que antes estaban excluidos son la mayoría numérica. La situación lleva a interpretaciones complicadas, incluso el complicado término “mayoría-minoría”. Nuestro idioma es a veces inadecuado, e ilustra las dificultades franqueables pero reales a las que se enfrentan las colaboraciones para la justicia social.

⁹ Código de Georgia, Art. 2, Cap. 7, Título 48, Secc. 1(a)(1).

eran elegibles para la categoría de “pertenecientes a grupos minoritarios”, el proyecto fue apoyado activamente por la Asociación Latinoamericana que opera en Atlanta, un grupo formado hace más de veinte años, cuando la mayoría de la población latina de Atlanta estaba conformada por personas de origen cubano. La diputada Jeanette Jamieson (Demócrata-Condado de Banks), copatrocinadora del proyecto de ley que fue finalmente aprobado, dijo: “Nuestra intención fue incluir a otros grupos que tienen influencia en nuestro estado... [pero] ciertos grupos se mostraron preocupados [ya que], si se agrandaba el pastel, su porción hubiese sido más pequeña»¹⁰.

Cuando llegó el momento de que la medida fuera sometida a votación, algunos de los miembros del “Black Caucus” (legisladores negros) que en 2002 tenía un total de 47 miembros en las Cámaras de Diputados y Senadores de Georgia (de un total de 236, o el 20 por ciento del total), inicialmente frustraron el proyecto de ley. El diputado Robert Holmes (Demócrata-Atlanta) articuló las preocupaciones de algunos legisladores afroamericanos. Sostenía que la raza, la identidad étnica, el país de origen, y la condición de inmigrante son conceptos diferentes, que pueden estar acompañados por diferentes formas de discriminación¹¹. “Muchos hispanos no son personas de color. Ellos conforman un grupo unido por su idioma, un grupo étnico”, dijo Holmes. “Estos individuos nunca vivieron las mismas cosas que nosotros”, continuó Holmes, “¿Por qué se beneficiaría una persona del idioma que habla?” Muchos legisladores blancos se unieron al Black Caucus para oponerse a la medida. “Muchos [legisladores blancos] se opusieron al proyecto porque los legisladores negros se habían opuesto”, dijo el diputado Holmes. “Estaban avalando nuestro pronunciamiento”.

No todos los legisladores afroamericanos se opusieron a la medida. Por ejemplo, el diputado y activista de larga data en cuestiones de derechos civiles Tyrone Brooks (Demócrata-Atlanta) fue categórico en su postura a favor de la medida. “Tenemos que expandir la carpa”, dijo el diputado Brooks. Y la diputada Stuckey Benefield admite que su error fue no consultar a los legisladores negros antes de introducir el proyecto de ley, lo que agregó confusión sobre la intención del proyecto. El reverendo Jesse Jackson, quién se encontraba por otros motivos en Atlanta, organizó una conferencia de prensa con los diputados Brooks, Stuckey Benefield y otros veinte legisladores, haciendo un llamado a la unidad.

Los informes de prensa se concentraron en los legisladores afroamericanos por oponerse a la inclusión de los “hispanos” en la lista de grupos que se incluirían. Sin embargo, la oposición no se limitaba a los afroamericanos, ni el apoyo se basaba exclusivamente en un entendimiento inclusivo de la justicia racial o étnica. Algunos blancos conservadores, motivados por su oposición a la acción afirmativa en cualquiera de sus formas, se opusieron al proyecto. Por ejemplo, el diputado Earl Ehrhart (Republicano-Condado de Cobb) ofreció una reforma de la medida para mantener lenguaje original. El incentivo de Ehrhart era “completamente diferente” al de los oponentes afroamericanos, dijo el diputado Holmes. “No quería dar lugar a ninguna acción afirmativa local”.

¹⁰ Las citas corresponden a entrevistas realizadas por la autora, a menos que se indique lo contrario.

¹¹ Ver Quiroz-Martinez, Julie, “Missing Link,” *ColorLines*, Verano, pág. 17.

Otros legisladores republicanos, incluso algunos que no se destacaban por sus políticas raciales progresistas, apoyaron la medida para captar el creciente número de votos latinos. “Los republicanos, incluso [el diputado Lynn que lidera a las minorías de la cámara] Westmoreland (Republicano-Shapsburg), estaban todos prestando atención al proyecto”, dijo la diputada republicana Stuckey Benefield. Los republicanos “apoyaron mucho, trataban de conseguir el voto de los hispanos”, dijo la diputada Stuckey Benefield. “Además, les gustaba ver como el Black Caucus se peleaba con los otros demócratas”.

En definitiva, el deseo político de captar el creciente electorado latino se superpuso a otras consideraciones. Cuando el proyecto inicial de la Cámara de Diputados fue bloqueado, el gobernador Barnes tomó la extraordinaria medida de hacer lobby personalmente para que se incluyera a los hispanos en la definición de minoría. Sensible a la creciente presencia electoral latina en el estado, el gobernador era también consciente de que la Cámara Nacional de Comercio Hispana planeaba realizar su convención en Atlanta con la presencia de unos 10.000 concurrentes en el otoño de 2001. Anticipando la necesidad de votos latinos y de ayuda financiera en una elección gubernamental reñida para el 2002, el gobernador Barnes también creó una Comisión Hispana para solicitar el aporte de los líderes latinos y fortalecer los lazos políticos con la comunidad latina. “La comisión estatal estaba presidida por un viejo amigo de Barnes, descendiente de españoles, Frank Perales Ros, un ejecutivo de nivel medio de la *Coca-Cola Company*” señaló Luz Borrero, directora ejecutiva del Consejo Regional del Sur.

En el año 2002, el gobernador Barnes instó a la comisión del Senado que estaba analizando la legislación, para que agregara un lenguaje que permitiese ampliar la definición de minoría en otro proyecto no relacionado con ese. Ese proyecto fue aprobado; el proceso completo concluyó en dos semanas. El estado de Georgia ahora tiene una definición inclusiva de minoría. Sin embargo, el impacto real de la definición expandida puede ser insignificante. Antes de la votación, aproximadamente tres empresas por año tenían acceso a los beneficios impositivos, según el diario *Atlanta Journal-Constitution*. Sin embargo, la extensión de estatus “minoritario” a los latinos en un estado del Sur conocido por su división entre negros y blancos, es muy importante. “Simbólicamente, es enorme”, dijo al periódico¹² Sam Zamarippa, el entonces presidente del Directorio de la Asociación Latinoamericana de Atlanta.

Antecedentes históricos: la contratación de empresas pertenecientes a grupos minoritarios de Georgia

La ambivalencia afroamericana y la oposición absoluta a la expansión del concepto de “minoría” en Georgia únicamente pueden entenderse dentro de un contexto histórico. En el sur de los Estados Unidos, muchos legisladores negros, alcaldes y otros funcionarios electos llegaron al poder en la era posterior a *Jim Crow*, con la esperanza de convertir el derecho al voto en beneficios económicos acordes, bajo la forma de contratos con el gobierno, inversiones en vecindarios de afroamericanos y empleos estatales. Si bien el empleo público creció, en especial en ciudades como Atlanta y Memphis, en las

¹² Bixler, Mark, y Kathy Pruitt, “Barnes hace lobby para ampliar la definición de ‘minoría’” [*Barnes lobbies to widen minority definition*], *The Atlanta Constitution*, 9 de marzo de 2001, pág. D3.

que la población negra es mayoría, el acceso a los contratos con el gobierno no ha estado disponible. Un conjunto de mecanismos ya conocidos sigue preservando el status quo de la economía: requisitos sindicales impiden a las pequeñas empresas cuyos dueños son afroamericanos tener acceso a contratos con el estado, y los medios de comunicación minoritarios no se utilizan para hacer publicidad de las oportunidades de licitaciones, para mencionar dos ejemplos.

No solamente está en juego la supervivencia de las empresas cuyos propietarios son negros, sino también las oportunidades de empleo de los trabajadores de esa raza. “Existen sobradas pruebas de que la contratación de empresas dirigidas por grupos minoritarios brinda oportunidades a los trabajadores que pertenecen a esas minorías”, declaró el abogado Rodney Strong, quien ha llevado a cabo varios estudios sobre empresas minoritarias en Georgia. Sobre la base de un estudio que realizó para la ciudad de Atlanta a comienzos de la década del noventa, Strong calculó que las empresas cuyos dueños son miembros de grupos minoritarios contratan el 80 por ciento o más de sus trabajadores en comunidades minoritarias. Con casi 7.000 personas empleadas por empresas cuyos dueños eran miembros de grupos minoritarios en ese momento, el impacto del empleo en los contratos estatales podría haberse extendido a más de 5.000 personas. Desde entonces, el número de empresas a cargo de afroamericanos se ha duplicado.

Sin embargo, los reclamos de los afroamericanos por la igualdad en las contrataciones estatales de Georgia han sido persistentemente desafiados por los blancos. Una larga serie de informes ha documentado el lamentable porcentaje de contratos adjudicados a empresas dirigidas por grupos minoritarios, no bastante, el principio de objetivos numéricos para la contratación de empresas minoritarias se ha visto siempre amenazado en la legislatura. Por ejemplo, la Comisión Asesora sobre Emprendimientos de Empresas dirigidas por Grupos Minoritarios (*MBE*) informó en su estudio de enero de 1992 que “en la medida en no se lleven registros estatales integrales para documentar con precisión qué parte de los dólares destinados a las contrataciones se adjudican a las empresas *MBE*..., la Comisión Asesora, utilizando la documentación disponible calcula que a los contratistas pertenecientes a grupos minoritarios se les adjudica no más de un uno por ciento de los contratos suscriptos cada año por los organismos gubernamentales bajo estudio”. Sin embargo, este modesto programa para Empresas dirigidas por Grupos Minoritarios sufrió enérgicos ataques en las sesiones legislativas de 1997 y 1998.

Los informes siguientes han indicado beneficios extremadamente limitados en las contrataciones de grupos minoritarios. Los números de 1995 de las Empresas dirigidas por Grupos Minoritarios mostraron pequeños aumentos desde 1992, pero con muchas divisiones del sistema de la Universidad estatal que todavía informaban menos del uno por ciento de utilización de las empresas dirigidas por minorías. Stone Mountain Park, ese venerable monumento ubicado al sur, llegó a un 2,2 por ciento. Un informe de Thomas D. Boston, economista de la Universidad Tecnológica de Georgia (*Georgia Tech*) publicado en el año 2000 mostró aumentos marcados en 1998 y 1999, en los

primeros años de la gestión del gobernador Roy Barnes¹³. Pero el abogado Strong sugirió que luego del «golpe» inicial de 1998 y 1999, cuando el gobernador Barnes asumió sus funciones, se han hecho pocos avances adicionales.

Una de las divisiones más codiciadas y vigiladas del gobierno estatal es el Departamento de Transporte (DOT), en la cual hay grandes sumas de dólares en juego y se realizan enérgicas e intencionadas campañas con el objeto de impedir la expansión de la contratación de empresas dirigidas por grupos minoritarios. El DOT de Georgia informó un 5,3 por ciento de participación de empresas dirigidas por minorías en sus contratos de 1995. En el año 2002, el porcentaje programado del DOT para la contratación de estas empresas llegó a un ocho por ciento, hasta que una votación que se llevó a cabo en una reunión a fines del verano bajó ese porcentaje a cinco. Esto fue seguido de un escándalo que provocó que el Directorio del DOT se retrajera en la siguiente reunión, aumentando el objetivo a un 10 por ciento. Se debe tener presente la discrepancia entre estos objetivos numéricos y las cifras reales de la población: según el censo del año 2000, los afroamericanos componen el 29,2 por ciento de la población de Georgia.

El debate sobre la definición de minoría en programas diseñados para superar la discriminación al hacer las contrataciones no se ha limitado a Georgia. En Memphis, estado de Tennessee, el consejo escolar que es en su mayoría de raza negra votó 5 a 4 en agosto de 1996 “para definir la minoría como ‘americanos negros’... aquellos que tienen sus orígenes en cualquiera de los grupos raciales negros de África”¹⁴. Su actuación responde a la presión de los intereses de empresas dirigidas por latinos, quienes sostenían, basados en un estudio de disparidad realizado por *J. D. Miller and Associates*, que las empresas dirigidas por hispanos en Memphis habían sido excluidas de las contrataciones que había hecho el gobierno de la ciudad por presentar tarifas superiores a la de las de las empresas dirigidas por afroamericanos. Al igual que en Georgia, la controversia abrió la puerta a los blancos que se oponían a cualquier tipo de acción afirmativa, quienes prevalecieron en este caso. Los Constructores y Contratistas Asociados, predominantemente blancos, demandaron al gobierno de la ciudad por el programa de contrataciones de empresas dirigidas por grupos minoritarios, y esto trajo como consecuencia que se lo reemplazara por un Plan de Negocios Equitativo neutral en términos raciales.

Estas y otras acciones políticas para limitar el acceso de empresas de dueños afroamericanos a los contratos estatales sirvieron de telón para la iniciativa legislativa de Georgia del año 2001 para expandir la definición de minoría. Como hemos visto, el debate por esa medida se convirtió sobre todo en un conflicto de intereses con respecto a sus consecuencias políticas y económicas y, de manera más sutil, en relación con las diferentes concepciones acerca de lo que es la raza. Su impacto real puede ser considerado leve. Sin embargo la historia de las contrataciones de empresa dirigidas por

¹³ Boston, Thomas D., “La utilización de empresas comerciales dirigidas por minorías por parte del Estado de Georgia en el ejercicio 2000” [State of Georgia Minority Business Utilization FY 2000] (Atlanta: Grupo de investigación de Boston, 6 de octubre de 2000).

¹⁴ Lancette, Chris, “El paro en Memphis” [Memphis Lock-out], *Hispanic Business*, Noviembre de 1996, pág. 10.

grupos minoritarios de Georgia, que refleja la de muchas localidades de toda la zona sur de los Estados Unidos, hace que este cambio sea simbólicamente significativo y políticamente instructivo.

Lecciones para establecer colaboraciones

El debate sobre la contratación de empresas dirigidas por grupos minoritarios ilustra algunas de las potenciales dificultades para las coaliciones de justicia social, y muestra por qué se debe prestar especial atención a la formación de una coalición. “Esto de alguna manera aclaró el panorama”, dijo el diputado Holmes, refiriéndose al impacto del debate sobre las posteriores iniciativas colaboracionistas en Georgia. Sin embargo, a pesar del resultado final inclusivo de la legislación, persiste la percepción de que existen intereses en conflicto entre los afroamericanos y las otras personas de color, específicamente los latinos.

Lo más importante de estos conflictos es que existe una diferencia fundamental en cómo se define el problema. ¿Impide acaso el racismo institucional y otras injusticias que los afroamericanos y otras personas accedan a los recursos económicos que necesitan y merecen, o el problema central es competencia por el acceso a “remedios” raciales específicos? La función de los formadores de opinión, por ejemplo, los líderes respetados en cada comunidad en la definición de la naturaleza del problema es fundamental para las perspectivas para colaborar en el logro de justicia social. Varios de los líderes por los derechos civiles a quienes entrevistamos expresaron una perspectiva inclusiva. Entre los más respetados y conocidos está un luchador veterano por los derechos civiles, el Reverendo C. T. Vivian de Atlanta, quien declaró: “Todas las minorías juntas apenas llegan a un 2,5 por ciento de las empresas [del sector privado] de Atlanta”. Para resolver este problema, el Rev. Vivian enfatizó repetidamente la necesidad de una acción unificada. “Debemos encontrar una forma de trabajar juntos en unión, entendiendo que nos necesitamos unos a otros y que dependemos unos de otros para el mayor beneficios de todos¹⁵”.

La tendencia de muchos inmigrantes, incluyendo a los latinos de la clase trabajadora, de concentrarse geográficamente en áreas que pueden representar jurisdicciones políticas clave, tales como Atlanta, crea un incentivo evidente para los avances políticos de parte de los afroamericanos, especialmente aquellos que están dedicados a luchar por los derechos al voto. La formación de una coalición es importante, sostuvo Vivian, “en especial entre negros y latinos, que es donde tenemos la mejor oportunidad de [unidad] dónde resulta la más importante debido al número, de modo que no perdamos el terreno político que tenemos”. Sin embargo, el Rev. Vivian sostuvo que las coaliciones deben basarse en relaciones de entendimiento mutuo que se extiendan más allá de la acción política inmediata. Enfatizó la necesidad de colaboraciones culturales, tales como traer artistas y músicos afrocubanos para actuar en festivales locales. “Necesitamos utilizar todo lo que tenemos para llegar a ellos, y demostrarles que estamos realmente preocupados y que cada fase de liderazgo negro está interesada tanto en la esfera cultural como la política”.

¹⁵ Entrevista realizada por Dwayne Patterson, 30 de enero de 2002.

Por definición, la construcción de una coalición es multilateral, y depende del acercamiento de los líderes latinos así como el de los afroamericanos. Teodoro Maus, ex Cónsul General de México en Atlanta, quien en el año 2002 pasó a liderar la Cámara de Comercio Mejicano-Americana, ha sido uno de los líderes más prominentes en Georgia. Maus se encargó de reconocer tanto la opresión racial de los afroamericanos así como de dar crédito en términos de experiencia con los que ellos contribuyen a la discusión. Destacó que los latinos pueden aprender mucho de la lucha por los derechos civiles, y felicitó al poder político y la capacidad organizativa que han ganado los afroamericanos. “Han estado peleando por un largo tiempo y saben muy bien cómo deben moverse las cosas y... cómo presionar”¹⁶. Al mismo tiempo, la fuerza de los Latinos, debido a su número y su fuerza de trabajo, brinda un agregado poderoso a la mesa de coalición, señaló.

Tanto los líderes latinos como los afroamericanos que apoyaron la construcción de la coalición han procurado contrarrestar la percepción de que el progreso racial-étnico es un juego en el que se gana nada o se pierde, o en el que los esfuerzos que un grupo hace para avanzar se logran a expensas de otro grupo. “Esta idea de el pastel que se achica es un mito”, dijo Leticia Saucedo, una representante estadounidense de origen mejicano de MALDEF, Defensa Jurídica Mejicano-Americano y Fondo Educativo de Tejas, en una reunión a nivel estatal que se realizó en Georgia para examinar la necesidad de construir puentes entre líderes afroamericanos y latinos. “Hemos mostrado en otros lugares que donde uno forma una coalición, la torta sí se expande”, continuó Saucedo, y “hay un aumento en el nivel de bienestar para todas las partes”¹⁷.

Desde el debate en Georgia en el año 2001, las relaciones y el mutuo entendimiento entre los líderes negros y latinos se han seguido desarrollando en el contexto de coaliciones en torno a la educación pública y la categorización racial (*racial profiling*). Esta educación mutua se ha extendido al área desconocida y hasta ahora no abordada de los derechos de los inmigrantes, y ha resultado en acciones adicionales de coalición dedicadas a las necesidades de los nuevos inmigrantes. Por ejemplo, una campaña legislativa en todo el estado para otorgar licencias de conducir a los conductores de Georgia de 34 países incluidos en el Área de Libre Comercio de las Américas, sin tener en cuenta la condición de la ciudadanía, atrajo el apoyo de los afroamericanos y de los legisladores progresistas blancos, si bien no fue aprobada durante la sesión legislativa del año 2003. Se obtuvo un pequeño beneficio para los inmigrantes mejicanos cuando la cónsul mejicana de Atlanta, Remedios Arnau, promovió una propuesta en el segundo trimestre de 2002, para que la Tarjeta de Identificación Consular se aceptara como una forma de identificación de los inmigrantes indocumentados que quisieran obtener una licencia de conductor en el condado metropolitano de DeKalb (Atlanta). Las organizaciones nacionales, tales como el MALDEF y los grupos latinos de base se unieron en este esfuerzo. De la misma manera, aparecieron diferencias entre los afroamericanos sobre la definición expandida de minoría, la comunidad latina tampoco se mostró unida en esta cuestión. Borrero del SRC acotó: “la Asociación Latinoamericana,

¹⁶ “Diálogo para una democracia inclusiva”[Dialogue for an inclusive democracy]. Video producido por George King. (Atlanta: Consejo Regional del Sur, febrero de 2002).

¹⁷ Ibid.

la mayor organización latina en Metro Atlanta, ubicada en el condado de DeKalb, se rehusó a avalar la propuesta”. Luego de un acalorado debate, la Dirección de Comisionados de DeKalb aprobó la medida con un voto en contra en octubre de 2002.

El poder electoral sigue siendo uno de los temas más importantes para la construcción de la coalición. Si bien los latinos nacidos de extranjeros y otros inmigrantes no pueden votar en las elecciones de los Estados Unidos a menos que se conviertan en ciudadanos naturalizados, sus hijos nacidos en los Estados Unidos son automáticamente ciudadanos y potenciales votantes. Aún en el sur, donde los afroamericanos son por lejos el grupo de color más numeroso de todos los estados, excepto Florida y Tejas, los activistas de todas las tendencias políticas han tenido muy en cuenta el gran aumento de la población hispana cuantificada por el censo del año 2000. El favor del electorado latino buscado por los políticos y los partidos brinda un punto de apoyo no solamente para los latinos sino también para las coaliciones multirraciales-étnicas a las que ellos se unen. A diferencia de California y otros estados con gran población latina, la relativamente pequeña base de votos de latinos en Georgia y otras partes del sur significa que ellos deben procurar formar alianzas para tener éxito político, una realidad que obviamente alienta la formación de coaliciones.

Las coaliciones electorales multirraciales-étnicas todavía no son fáciles de crear. La combinación del asentamiento de los inmigrantes en determinados vecindarios de Atlanta y el aburguesamiento de los blancos en otros, ha hecho que algunos activistas afroamericanos teman el perder la ciudad como una base de poder para los funcionarios negros electos. En este contexto, los activistas como el Rev. C. T. Vivian han abogado por la colaboración, y las recientes tendencias electorales brindan apoyo práctico a esa postura. Los latinos ya están ejerciendo peso político en Georgia, con la elección de tres diputados latinos en el año 2002. Sam Zamarríppa, vicepresidente de desarrollo comunitario de la Cámara de Comercio de Metro Atlanta, quien había hecho una campaña para ampliar la definición de minoría para la Asociación Latinoamericana, le ganó en forma reñida elección primaria del partido demócrata de Atlanta a la exconsejera del Consejo Escolar, la afroamericana Brenda Muhammed. Siendo el único candidato que se presentó, Pedro Marin ganó las elecciones primarias democráticas en el condado de Gwinnett y, en las elecciones generales, el candidato republicano David Casas (Distrito 66) le ganó cómodamente a un candidato del Partido Libertario.

En los estados del sur como Georgia, en los que la exclusión de los afroamericanos es un recuerdo viviente para muchos activistas políticos y dónde la lucha por los derechos civiles continúa, la inmigración y la diversificación racial/étnica están transformando el escenario político. Algunas coaliciones exitosas ya se han construido, pero se necesitan muchas más centradas en demandas específicas: aumentar el conjunto de financiaciones para las empresas cuyos dueños son miembros de minorías, mejorar los lugares de trabajo y las políticas salariales, mejorar la educación, terminar con la categorización racial en el contexto de la justicia penal e implementar políticas de inmigración justas. Traducir el poder electoral potencial en coaliciones políticas exitosas depende de cómo se programe una agenda sobre derechos civiles expandida y revigorizada, que abarque las necesidades de las diferentes personas de color y los

derechos de los inmigrantes, así como también el legado histórico del desposeimiento y resistencia de los afroamericanos en el sur de los Estados Unidos.